

GEPARK ARGENTINA LIMITED SOCIEDAD EXTRANJERA C/ DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA s/ recurso directo de organismo externo.



MONTI
Laura
Mercedes

Firmado
digitalmente por
MONTI Laura
Mercedes
Fecha: 2025.08.27
13:19:33 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 2433/2447, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) confirmó el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación que, a su turno, había revocado parcialmente las resoluciones 332/2015 (DV RRII P) y 333/2015, dictadas por la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Palermo de la AFIP-DGI.

Explicó que, mediante esos actos, el Fisco Nacional había determinado de oficio la obligación tributaria de Geopark Argentina Limited Sociedad Extranjera (Geopark, en lo que sigue) en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado, correspondientes a los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009.

Recordó que la AFIP había sustentado su ajuste en la presunción consagrada en el segundo art. sin número agregado a continuación del art. 18 de la ley 11.683 (18.2, en adelante), toda vez que la actora había recibido, en concepto de aportes de capital y préstamos, transferencias de dinero provenientes de Geopark Holdings Limited y Geopark Argentina Limited, sociedades domiciliadas en Bermudas, territorio considerado por la legislación argentina como de baja o nula tributación.

Consideró que la cuestión a dilucidar en esa instancia estribaba en determinar si los aportes y préstamos observados

por el ente recaudador comportaban incrementos patrimoniales no justificados en los términos de la citada norma y, por ende, susceptibles de ser calificadas como ganancias netas y ventas omitidas.

Diferenció dos órdenes en los agravios deducidos por el Fisco en esa instancia: por un lado, la falta de acreditación del origen de los fondos recibidos por Geopark y, por otro, el alcance del art. 18.2 de la ley 11.683.

En relación al primero, sostuvo que las críticas efectuadas por la recurrente vinculadas a la valoración de la prueba efectuada en la instancia anterior, no alcanzaban para configurar la hipótesis de arbitrariedad exigida por el art. 86 de la ley 11.683.

En este punto, añadió que el Tribunal Fiscal de la Nación había concluido que los fondos remitidos desde el exterior se hallaban debidamente justificados a partir de distintos procesos de colocación de acciones que efectuó Geopark Holding Limited en el mercado de Londres, aspecto que la AFIP no lograba rebatir.

En referencia a la segunda cuestión, indicó que, si bien la acreditación del origen de los fondos comprometidos en los préstamos y aportes de capital no encuadraba en ninguno de los supuestos estipulados en el art. 18.2, la actora había demostrado que las sumas receptadas no provenían de actividades o capitales gravados por la legislación argentina, que pudieren haber originado utilidades no declaradas.

Dicha circunstancia, junto a la naturaleza *iuris tantum* de la presunción mencionada, llevó a la alzada a concluir que "los fondos aquí involucrados se encuentran debidamente



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

justificados y alcanzan para rebatir el ajuste fiscal en los términos en que fue propuesto en esta causa."

Por último, consideró que esa conclusión permanecía incólume frente a la interpretación literal del tercer párrafo del art. 18.2 que proponía el ente recaudador.

Así, indicó que los tres escenarios allí previstos para acreditar el origen de los fondos resultaban taxativos en cuanto a su carácter vinculante y mandatario para el ente recaudador, en la medida en que la configuración de ellos lo obligaba a considerar justificado el incremento patrimonial.

Añadió que esa directriz no podía ser entendida como una restricción al "derecho de probar en contrario con que cuenta el contribuyente incidido y a la correlativa potestad de la administración de valorar las pruebas que se acompañen para justificar el incremento patrimonial detectado."

-II-

Disconforme, la AFIP dedujo recurso extraordinario federal, que fue concedido por el a quo en la medida en que se hallaba en juego la interpretación y alcance de una norma de carácter federal y denegado en cuanto a la arbitrariedad atribuida a la decisión (v. resolución del 22 de febrero de 2024), sin que obren constancias de la interposición de la correspondiente queja.

Sostiene que la sentencia apelada resulta arbitraria, en cuanto prescindió de las normas legales aplicables a la

solución del pleito y efectuó una errónea valoración de la prueba producida en el expediente.

En primer lugar, refiere que la Cámara realizó una equivocada exégesis del art. 18.2 de la ley 11.683.

En este sentido, indica que la presunción allí establecida admite prueba en contrario en la medida en que el contribuyente demuestre, únicamente, que los fondos remitidos se originaron en: 1- actividades realizadas por aquél en el país calificado como de baja o nula tributación; 2- actividades desplegadas por terceros en tales países; 3- o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados.

En esta línea, indica que la ley *"sólo permite desvirtuar los efectos de la presunción legal mediante la acreditación"* de alguna de las tres situaciones mencionadas en el tercer párrafo de ese dispositivo, lo que conlleva a colegir, según su punto de vista, que fue voluntad del legislador restringir a dichos supuestos la prueba en contrario admisible en el marco del sistema presuntivo aquí debatido.

Insiste en que la norma limita la actividad probatoria que puede realizar el contribuyente a fin de justificar el origen de los fondos recibidos desde el exterior, sin que deba admitirse ningún hecho distinto a los estipulados en ese precepto.

Con tal fundamento, arguye que en esta causa se halla fuera de discusión que la demandante acreditó que los fondos comprometidos en los aportes de capital y préstamos tuvieron su origen en colocaciones de acciones efectuadas por Geopark Holdings Limited fuera de la jurisdicción de Bermudas, por lo



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

que no encuadra en ninguno de los tres supuestos mencionados por la normativa.

En segundo término, cuestiona la valoración de la prueba realizada por la sentencia recurrida.

Expresa que el informe pericial contable adolece de inconsistencias que no fueron advertidas por el tribunal apelado.

Así, sostiene que los expertos realizaron su labor sobre la base de fotocopias simples y documentos privados que carecían de fecha cierta, lo que priva de validez al referido medio probatorio.

En igual sentido, manifiesta que la prueba informativa no aportó datos relevantes que permitan derribar las resoluciones impugnadas.

En definitiva, concluye que el ajuste fiscal resulta procedente toda vez que la prueba producida en el expediente solo demuestra que los fondos remitidos a la actora fueron el resultado de diversos procesos de colocación de acciones en el mercado alternativo de la bolsa de Londres, mas no que se hubieren originado en actividades realizadas por el contribuyente o terceros en Bermudas, ni tampoco en la colocación de fondos oportunamente declarados en dicho país.

-III-

A mi modo de ver, el remedio federal es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en tela de juicio el

alcance e interpretación de preceptos federales (art. 18.2 de la ley 11.683) y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el recurrente ha sustentado en ellas (art. 14, inc. 3, de la ley 48).

Destaco que el recurso ha sido concedido únicamente en lo atinente al alcance e interpretación de normas federales y rechazado en lo relativo a la arbitrariedad endilgada al pronunciamiento, sin que existan constancias de la presentación de la pertinente queja, razón por la cual la apelación extraordinaria se halla circunscrita al examen de esa causal (Fallos: 319:288, entre otros).

Por último, corresponde recordar que en la tarea de establecer el correcto sentido de las normas de naturaleza federal, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones de las partes ni del tribunal apelado, sino que le incumbe realizar "una declaratoria sobre el punto" (art. 16 de la ley 48), según la inteligencia que ella rectamente les otorgue (arg. Fallos: 307:1457; 320:1915, entre otros).

-IV-

Liminarmente, corresponde señalar que no es objeto de debate en esta instancia que:

- a) Geopark recibió, en concepto de aportes de capital y préstamos, fondos provenientes de Geopark Holding Limited y Geopark Argentina LTD, ambas con domicilio en Bermudas.
- b) El ingreso de esos fondos se produjo en los períodos fiscales 2007, 2008 y 2009.
- c) El ente recaudador consideró aplicable, en relación a aquellas sumas, la presunción consagrada en el art. 18.2



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

de la ley 11.683 y, por lo tanto, determinó de oficio, por conocimiento presunto de la materia imponible, la obligación tributaria de Geopark frente al impuesto a las ganancias y al impuesto al valor agregado.

- d) Los fondos recibidos por la sociedad local se originaron en cuatro procesos de colocación de acciones llevados a cabo por Geopark Holding Limited en el Mercado Alternativo de la Bolsa de Londres.
- e) La operatoria referida en el inciso anterior no se encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias ni por el IVA de nuestro país.
- f) Los hechos alegados y probados por la actora para justificar el origen de los montos recibidos no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el tercer párrafo del art. 18.2 de la ley 11.683.

-V-

Sentado lo anterior, entiendo que el tema en debate en esta instancia radica en determinar si, para desvirtuar la presunción de un incremento patrimonial no justificado como consecuencia del ingreso de fondos provenientes de países de baja o nula tributación en las condiciones previstas en el art. 18.2 de la ley 11.683, el contribuyente se encuentra restringido a demostrar el acaecimiento de las circunstancias contempladas en ese tercer párrafo -esto es, "*actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en dichos países*

o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados"- o, por el contrario, no cuenta con tal restricción, razón por la cual puede acreditar otros hechos que demuestren el origen de tales fondos.

-VI-

Liminarmente, entiendo pertinente recordar que el art. 18.2 de la ley 11.683 fue introducido por la ley 25.795, y determina: "Cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación -a que alude el artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones)- cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate, se considerará que tales fondos constituyen incrementos patrimoniales no justificados para el tomador o receptor local.

Los incrementos patrimoniales no justificados a que se refiere el párrafo anterior con más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, representan ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias y en su caso, base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio comercial en los impuestos al valor agregado e internos.

No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como justificados aquellos ingresos de fondos a cuyo respecto el interesado pruebe fehacientemente que se originaron en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

terceros en dichos países o que provienen de colocaciones de fondos oportunamente declarados" (subrayado, añadido).

Se desprende de lo anterior que la norma transcripta consagra un mecanismo presuntivo según el cual los ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación, cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate, se considerarán incrementos patrimoniales no justificados para el destinatario local.

Según surge del mensaje 221 de elevación del proyecto de ley al Parlamento, la incorporación de la figura aquí estudiada tuvo como finalidad *"otorgarle a la administración una herramienta efectiva para evitar las maniobras de evasión fiscal que se materializan a través de jurisdicciones de nula o baja tributación..."* (V. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados 15° reunión, 6ª sesión ordinaria, 3 de septiembre de 2003, pág. 2605, subrayado agregado).

En tal sentido, ha señalado V.E. que no es objetable que el legislador, al establecer un tributo, utilice la técnica de las presunciones. La necesidad de acudir a éstas es admitida por la doctrina y receptada por los ordenamientos jurídicos de diversos países, aunque se ha enfatizado en que, para evitar situaciones inicuas, su uso debe ser limitado a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen (Fallos: 333:993).

Además, sostuvo esa Corte que la problemática de las presunciones en materia tributaria es el resultado de la tensión

de dos principios, el de justicia tributaria y el de capacidad contributiva, y es por ello que "*requieren un uso inteligente, concreto y racional*" (Fallos: 333:993).

Ahora bien, con el fin de poner en su recto quicio la cuestión federal, estimo prudente recordar que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:176; 307:928, entre otros).

En base a estas claras premisas, considero que **el tercer párrafo** del art. 18.2 de la ley 11.683, **condiciona el empleo de la presunción** al hecho de que los fondos provenientes de un país de nula o baja tributación no se hubieran originado en actividades efectivamente realizadas por el contribuyente o por terceros en el estado del que proceden, o deriven de colocaciones de fondos oportunamente declarados pues, en la medida en que el sujeto receptor demuestre la verificación de alguna de estas situaciones, **la AFIP se encuentra compelida** a considerar justificado el incremento patrimonial experimentado por el sujeto local.

De este modo, entiendo que las previsiones contenidas en el tercer párrafo de ese dispositivo operan como un **mandato legal dirigido al ente recaudador**, mas nada encuentro en la letra del precepto que restrinja el derecho del contribuyente a desvirtuar -una vez dictado el acto determinativo de oficio sobre la base de tal presunción- los hechos legalmente inferidos.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

No debe pasar inadvertido que la exégesis aquí propiciada encuentra también adecuado respaldo en las manifestaciones vertidas por varios legisladores en el marco del debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley 25.795.

Al respecto, no es ocioso recordar que V.E. tiene dicho que el intérprete debe utilizar la voluntad del legislador como criterio hermenéutico para indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, tarea en la que no pueden descartarse los antecedentes parlamentarios y el mensaje del órgano que lo propone, que resultan útiles para conocer su sentido y alcance (doctrina de Fallos: 323:3386).

Así, en la Cámara de Senadores de la Nación, el Sr. Salvatori sostuvo *"Este proyecto crea presunciones que permiten revertir la carga de la prueba. Es decir, las determinaciones de oficio que la AFIP realice mediante los supuestos establecidos en esta ley se presumen correctos, pero tiene que dejar al contribuyente la posibilidad de probar lo contrario."* (V. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación 27° reunión, 16° sesión ordinaria, 29 de octubre de 2003, pag. 187, subrayado agregado).

Asimismo, el senador Capitanich indicó que: *"También se plantea una modificación respecto a los ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación. En ese sentido, cualquier ingreso proveniente de un país de baja o nula tributación presupone, naturalmente, un mecanismo donde no exista justificación de origen. Por lo tanto, se presupone el*

incremento patrimonial correspondiente y también está sujeto a los mecanismos de presunción respecto de la base imponible del impuesto a las ganancias. Este mecanismo que se establece respecto de aquellos ingresos provenientes de fondos del exterior tiene que ver con una interpretación, una corrección desde el punto de vista de la AFIP en virtud de un fallo de la Corte Suprema de Justicia -el caso Trebas-, que no identificó la presunción por parte de la AFIP como adecuada o correcta. En este sentido, con esta legislación vamos a admitir con precisión que aquellos ingresos que no hayan sido debidamente justificados, salvo admisión de prueba en contrario, inexorablemente se tomarán como incremento patrimonial no justificado." (V. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación 27° reunión, 16° sesión ordinaria, 29 de octubre de 2003, pag. 180, subrayado agregado).

A su turno, en el debate ante la Cámara de Diputados, el legislador Corfield sostuvo que: "...se han tratado de clarificar las facultades de la AFIP para considerar justificados los ingresos de fondos del exterior cuando el contribuyente pruebe fehacientemente su origen" (V. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados 15° reunión, 6ª sesión ordinaria, 3 de septiembre de 2003, pag. 2617, el subrayado no pertenece al original).

A partir de las manifestaciones transcriptas, es posible inferir la intención de los legisladores de garantizar a los contribuyentes el derecho a justificar o acreditar el origen de los fondos receptados desde un país de nula o baja tributación sin cortapisas.

GEPARK ARGENTINA LIMITED SOCIEDAD EXTRANJERA C/ DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA s/ recurso directo de organismo externo.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Teniendo ello en cuenta, pienso que la interpretación propiciada por el ente recaudador no solo carece de adecuado fundamento en la letra del precepto bajo estudio, sino que tampoco resulta una hermenéutica discreta y razonable que garantice, como tal, el hallazgo de la voluntad del legislador, acorde con los fines de la legislación específica del caso (Fallos: 258:75 y sus citas).

Bajo tales lineamientos, forzoso es colegir, entonces, que Geopark no se hallaba constreñida por la acreditación, únicamente, de las circunstancias previstas en el tercer párrafo del art. 18.2 de la ley del tributo con el fin de justificar, en el marco del presente proceso, el origen de los fondos cuestionados por las resoluciones impugnadas.

-VII-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario interpuesto y confirmar la sentencia apelada por los fundamentos aquí brindados.

Buenos Aires, de agosto de 2025.